

El sistema de quejas chino

Diez millones de casos anuales, de los que se resuelven pocos. El sistema de apelaciones al emperador sigue vigente **Texto: Rafael Poch Fotos Norberto Cuenca**

Desde principios de los años ochenta, entre 30 y 40 millones de campesinos chinos han sufrido expropiaciones de tierra. Para más de la mitad, las expropiaciones significaron una pérdida de nivel de vida, señala un estudio de la Academia de Ciencias Sociales de China. Otros fueron estafados en la operación: sus tierras, confiscadas en aras del bien común, sirvieron para llenar los bolsillos de funcionarios y empresarios. Y otros perdieron su identidad porque al perder la tierra dejaron de ser campesinos. A los 800 vecinos de la aldea de Dong Wu Li, a tres horas en coche de Pekín, les ocurrieron las tres cosas.

El pueblo está situado en los alrededores de Tianjin, una ciudad de seis millones de habitantes, y ha quedado atrapado por el crecimiento. Es un área de casas campesinas tradicionales de ladrillo de una sola planta, rodeada de barrios colmenas, polígonos industriales, aguas putrefactas y desolados descampados, bajo una crónica nube de contaminación, que al término de la jornada deja al visitante no fumador la sensación de haberse excedido con el tabaco.

“Antes éramos campesinos, ahora no somos ni campesinos ni obreros; no se sabe lo que somos”, dice el señor Zhao Baoming. Zhao fue elegido jefe del pueblo democráticamente por sus vecinos en julio del 2002, como ocurre en centenares de miles de aldeas de China.

Hasta entonces, el jefe había sido otro personaje, nombrado a dedo. Un tal Li Deshan, que ejerció durante treinta años. “Al principio era un campesino más”, pero con el tiempo se convirtió en una especie de cacique, un colega de los poderosos de la zona, dicen.

El alcalde-cacique Li estafó a su co-

munidad. De acuerdo con tres promotoras, una de ellas dirigida por su propia hija, y con las autoridades planificadoras, dijo que había que vender la tierra cultivable para edificar una fábrica. En total, el pueblo tenía unas 4.000 *mu*, 266 hectáreas. Tocaban a 5 *mu*, un tercio de hectárea, por persona, lo que permitía una vida campesina media. En varios años se vendió la mayor parte de la tierra de cultivo. El negocio fue redondo: Li y los suyos compraron a 14.000 yuan por *mu* a los vecinos, les repartieron 10.000 yuan (1.000 euros) por cabeza, y vendieron por 300.000, más de veinte veces el precio de compra.

Hoy, los campesinos conservan una pequeña parcela de 0,3 *mu* por habitante para el autoconsumo, pero se han visto obligados a buscarse la vida

El campesinado recurre a ese método para saltarse a las autoridades locales

con todo tipo de trabajos precarios. Uno reparte mercancías con un bicicarro, otro hace chapuzas y el de más allá trabaja en la construcción en obras lejanas. De ahí, el “ya no sabemos lo que somos”.

Zhao Baoming y sus compañeros llevan al visitante extranjero a ver los pocos campos que aún conservan. Son las tierras más alejadas del pueblo, flanqueadas por una autopista, contaminadas por una fábrica química de las cercanías, explican, pero se nota que sienten apego por esos campos que les daban alimento y una identidad. Ahora Dong Wu Li ya no es un pueblo, de la misma forma en que sus habitantes ya no son campesinos. Lo rural y lo urbano se han fundido aquí en una confusa y sucia nube que algunos definen como “progreso”.

Desde el 2001 los vecinos de este ex pueblo aprisionado por el monstruo urbano intentan denunciar la estafa de la que fueron objeto. Se han convertido en peticionarios (*shangfangzhe*). Primero llamaron a las puertas de las autoridades de su distrito, luego a las de Tianjin, y al final se dirigieron al Departamento de Cartas y Quejas de la Población de Pekín.

Todas las miserias de China

En ese lugar, situado cerca de la estación ferroviaria del sur de la capital, se concentran diariamente centenares de peticionarios; campesinos víctimas de irregularidades por confiscación de tierras, pleitos privados de propiedad y conflictos de indemnizaciones, en los que, a falta de un sistema judicial eficaz e independiente,

“¿Un abogado?, pero ¡si tenemos razón!”. Para ellos el derecho es una abstracción. La justicia, sin embargo, es algo bien concreto y claro como la luz del día.

A los pocos minutos de conversar con algunos peticionarios en los alrededores de la oficina pekinesa, el periodista se ve rodeado por grandes corros de hombres y mujeres vociferantes. Todos quieren explicar sus casos a una persona que parece interesarse por ellos. Muchos no entienden que ese interés de informador no tiene nada que ver con la solución de sus casos, y a los diez minutos ya hay alguno que ha decidido echar al extranjero la culpa de su infortunio. Al final, llega la policía y suena el toque de retirada...

El sistema de quejas y peticiones (*xinfang zhidu*) tenía una antigua tradición en la China imperial. Era un mecanismo de último recurso que permitía a los de abajo exponer sus agravios en la corte celestial y brindaba a la burocracia imperial una perspectiva de lo que se cocía en las lejanas provincias, donde los mandarines locales hacían y deshacían a su antojo. La República Popular asumió ese mecanismo por las mismas razones, pero actualmente el sistema está saturado y se encuentra en crisis.

Desde hace dos años, el número de quejas recibidas por las instancias centrales aumenta notablemente. Fueron 10 millones las quejas recibidas en Pekín en el 2004, con un incremento del 14% sobre el año precedente.

Todavía más alarmante es el hecho de que tal aumento coincida con un estancamiento, e incluso disminución, de las quejas presentadas a nivel local y provincial. El motivo es que la gente común siente una profunda desconfianza hacia sus gobernantes locales, que controlan tribunales y policías de distrito, lo que convierte en ilusoria cualquier apelación y obliga a



Liao Toncui

Esposa de un minero de la provincia de Hunan muerto en accidente laboral (en China mueren 6.000 mineros al año por ese motivo). De la indemnización de 64.000 yuan (6.400 euros) que le correspondía, solo recibió la mitad. El resto se lo quedó un hermano del marido, cuya esposa, alega Liao, era familiar del juez que tomó tan irregular decisión





Liao Zhonglin

Empleado forestal del distrito Ning Yuan de la provincia de Hunan. Denunció a un funcionario del distrito que talaba árboles en zonas naturales protegidas para su venta y enriquecimiento personal. Denuncia que, como consecuencia, fue golpeado y se le negó la oportunidad de ascender, así como la posibilidad de ingresar en el Ejército de Liberación Popular



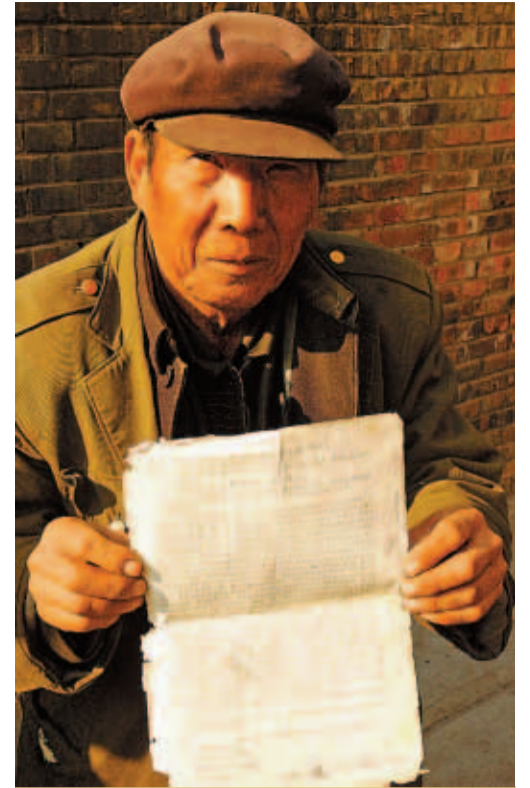
Liu Hao

Padre de un joven de la aldea de Mei Dong, provincia de Sichuan. Su hijo asistía a una representación artística a cargo de un grupo ambulante de inválidos. Un espectador, Xu Xingjia, se burló de los inválidos y el hijo de Liu salió en su defensa. Se inicia así una serie de peleas que implican a los parientes de ambas familias, pero el padre del burlador Xu es policía, y Liu acaba arrestado en comisaría cinco días



Yin Hailan

Su marido fue condenado por estafa de 250.000 yuan (25.000 euros) en una pelea entre dos empresas de la provincia de Heilongjiang. La condena arruina a la familia, cuyo único hijo se ve forzado a dejar los estudios. Yin defiende la inocencia de su marido



Huang Jincai

Jubilado y ex combatiente de la guerra de Corea. Le corresponde una asignación de 380.000 yuan (38.000 euros) en calidad de "soldado revolucionario". Denuncia que el dinero se lo quedaron las autoridades de Ningde, provincia de Fujian



remitir las quejas directamente al Gobierno central.

Quejarse significa tomar el tren y viajar a las ventanillas de Pekín, sede de un poder menos desprestigiado, frecuentemente gastándose precarios ahorros. En la capital hay cinco ventanillas de quejas (la del citado departamento de quejas, la de la comisión de control del Comité Central del Partido Comunista, la del Ministerio de Supervisión, la de la Asamblea Nacional Popular y la de la Fiscalía) y cada ministerio tiene, además, un sistema propio de supervisión.

“La proliferación de ventanillas solo significa que ninguna de ellas tiene poder suficiente para poner firmes a los organismos provinciales afectados por el desaguado denunciado. Mandan desde Pekín una carta con la directiva ‘resuelvan esto’ y allá, simplemente, la ignoran”, señala un experto.

Los peticionarios se concentran en un barrio de la capital donde hay albergues, e inician su peregrinación por todo ese rosario de instituciones desbordadas por el cúmulo de gritos y cartas denunciando tremendas injusticias. Los funcionarios, incluso si tienen buena voluntad y disposición, se ven superados e impotentes por los temas planteados, y se pasan los asuntos unos a otros como patatas calientes.

En los casos más comprometidos para su propia reputación, las autoridades provinciales, frecuentemente relacionadas con turbios intereses empresariales, envían a sus policías de provincias a cazar a sus críticos en la capital, antes de que éstos denuncien sus corruptelas y abusos. Las organizaciones de Derechos Humanos denuncian casos de torturas y malos tratos a peticionarios. Algunos son ingresados en psiquiátricos o enviados por la policía de sus provincias a campos de “rehabilitación por el trabajo” (Liao Jiao), un castigo que la policía

puede impartir en China sin sanción judicial y que es un comodín para todo tipo de ajustes de cuentas. A veces también compran a funcionarios de las oficinas de quejas de Pekín para que no den curso a esos asuntos.

Las encuestas muestran que muchos peticionarios, el 94%, llegan a Pekín con la sincera esperanza de que el Gobierno central hará justicia y solucionará su caso. A la semana de estar en la capital, solo un 40% mantiene esa esperanza. Con el tiempo, los agravados desarrollan una puesta en cuestión radical del régimen político. El contacto y convivencia con los pleitos de otros peticionarios de todo el país, convierte en zonas de crispada disidencia los alrededores de las oficinas y a todo el barrio de los peticionarios de Pekín, donde la policía echa

porádicos informes sobre injusticias. Sin estabilidad será imposible edificar la “sociedad armoniosa” (he xie she hui), decían, citando el concepto mediante el que el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao están intentando corregir los desequilibrios creados por el capitalismo salvaje de los últimos veinte años con recetas de estilo socialdemócrata, frecuentemente despreciadas por los burócratas más degenerados y corruptos.

El Comité Central y el Ministerio de Propaganda respondieron en Pekín accediendo a esa presión de provincias y atando aún más corto a la prensa. Según las nuevas instrucciones emitidas, cualquier reportaje o informe de la prensa central sobre realidades de provincias, debe recibir el

Temeroso de un poder judicial fuerte, el régimen fomenta este proceder

sin contemplaciones al periodista que asoma la nariz.

A grandes rasgos, esta situación es perfectamente conocida por el Gobierno chino. En mayo, una directiva de Pekín instó a las provincias a solucionar in situ las quejas de la población para evitar la avalancha de pleitos que se acumulan en la capital. La directiva era una llamada a la atención para que las provincias velen más por la justicia y moderen la corrupción de sus funcionarios, pero resultó en algo completamente diferente.

En respuesta, diecisiete provincias replicaron con una carta colectiva de sus respectivos departamentos de propaganda pidiendo al Gobierno central que pusiera en cintura las denuncias de la prensa, responsable, decían, de echar leña al fuego con sus es-

aval previo del departamento de propaganda de la provincia concernida. Los reportajes sobre temas sociales serán particularmente controlados y las acusaciones contra altos funcionarios de la nomenclatura provincial deben ser fiscalizadas por las administraciones a las que les afecta antes de su publicación. El resultado de la partida ha sido una bajada general de la ya de por sí restringida crítica.

“Todo este sistema de quejas no es más que un parche para paliar una situación que hay que cambiar por completo, estableciendo un sistema judicial independiente, pero nuestros dirigentes tienen alergia a la división de poderes y los riesgos que ésta contiene les producen vértigo”, dice He Weifang, profesor de Derecho de la Universidad de Pekín. ●

En el 2004 se recibieron en Pekín diez millones de quejas, con un incremento del 14% respecto

del año anterior. Pese a la aceptación inicial que genera, el sistema está en crisis